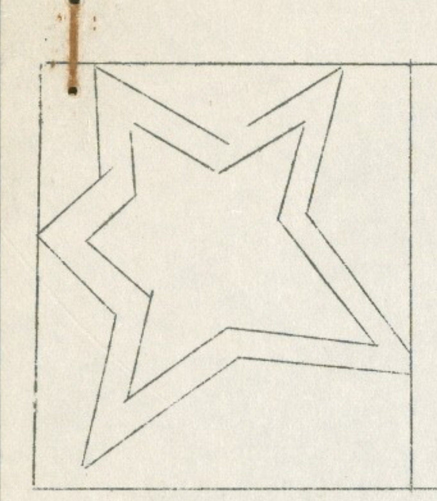


BANDERA ROJA

Nº 9 Barcelona Noviembre 1970

EL ESTADO ESPAÑOL Y EL BLOQUE DOMINANTE



ANALISIS DE LAS DIVERSAS CLASES Y CAPAS QUE DETENTAN EL PODER EN ESPAÑA

EL BLOQUE DOMINANTE Y ESTADO FRANQUISTA

"El marxismo es el análisis concreto de una situación concreta" (Lenin).

Efectivamente, el marxismo es el análisis concreto de una situación concreta porque sólo el estudio de las manifestaciones políticas de la lucha de clases en un momento dado, permite descubrir las contradicciones principales, y en primer plano de la sociedad. Entonces se puede participar eficazmente en la lucha de clases, es decir, partiendo de la realidad y no de la impaciencia subjetiva.

Con este artículo, BR empieza un análisis político de la realidad española. En este primer texto se estudian especialmente las relaciones existentes entre la oligarquía y el Estado franquista, las contradicciones internas del bloque domiante y las existentes entre éste y el aparato estatal. Partimos de un breve análisis de clase de la sociedad española y seguimos en sus grandes líneas la evolución de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, para enmarcar el tema principal del artículo. Al final esbozamos unas consideraciones sobre el movimiento obrero y su lucha contra la lógica del desarrollo capitalista. Este esboro será completado en próximos números, con un análisis de la composición y de los objetivos del movimiento obrero y popular y con un estudio socio-económico del capitalismo español (a publicar en los Cuadernos Comunistas).

En el presente estudio manejamos algunos conceptos que quizá convenga aclarar. Hablamos, por ejemplo, "de bloque dominante" más que de "Clase dominante" y utilizamos un concepto del partido político que no es el que se acostumbra a usar corrientemente. Nos parece, en efecto, que el concepto de bloque dominante da cuenta con más exactitud de la dominación de clases en el seno de una formación social (como la actual). En efecto, cada formación social es el resultado de una superposición orgánica de diversos modos de producción, en la que uno de estos resulta dominante. No existe un modo de producción en estado puro ni, por consiguiente, un modo de producción capitalista perfecto sin adherencias históricas. Existe, eso sí, la formación social capitalista, en la que el modo de producción capitalista es dominante, y en la que coexisten orgánicamente diversos modos de producción resultates del proceso histórico.

Por ello, más que de clase dominante cabe hablar de bloque dominante, es decir, de bloque compuesto por diversas clases y fracciones de clases dominantes, en el que una de ellas (identificada con el modo de producción dominante) ejerce la hegemonía.

Este bloque dominante se comunica con la escena política,-es decir, con la práctica de clases centrada en el Estado- mediante unos canales específicos, que son los partidos políticos. Por eso importa relativamente poco que los partidos tomen la forma de tales o actúen bajo la capa de grupos de presión; lo esencial es que sean canales efectivos de comunicación entre el bloque dominante y la escena política.

Hechas estas aclaraciones, pasemos al objeto concreto de nuestro estudio.

Por un análisis de clase de la sociedad española

La actual documentación sobre clases sociales es casi totalmente inútil para nuestro propósito. La mera enumeración de categorías estadísticas nos proporcionan elementos descriptivos o indicadores que pueden ayudarnos a caracterizar las clases sociales pero nunca podremos deducir de los estratos definidos por la categoría socio-profesional, el nivel de renta o el prestigio social de las clases sociales como factores determinantes de la evolución histórica. De mucha menor utilidad es aún la retórica formalista de la mayoría de los documentos políticos "revolucionarios" que se limitan a repetir los tópicos mal entendidos por jovencitos tan ignorantes del marxismo como marginados de la lucha de clases y cuyo afán de concreción se agota trasladando mecánicamente los análisis de clase hechos por Lenin en la Rusia de principios de siglo o por Mao en la China de hace treinta años.

Una clase, como fuerza social capaz de influir decisivamente en el devenir histórico, existe no sólamente a nivel de las relaciones sociales de producción sino también a través de su práctica política o ideológica. En última instancia es la práctica de una clase -su lucha- la que la define como tal. Por ello, las clases no pueden estudiarse aisladamente sino a través del estudio de la lucha de clases. Las clases sólo pueden determinarse a partir del análisis de la lucha de clases, análisis de una coyuntura concreta de una formación social dada.

En nuestro caso de nada nos serviría la enumeración gratuita de las posibles clases sociales y a partir de aquí hacer hipótesis sobre sus posibles contradicciones. Es lo contrario lo que debemos hacer: estudiar la lucha de clases tal como se ha manifestado en España en los últimos treinta años y a partir de aquí podremos determinar las clases sociales fundamentales y los ejes sobre los que se desarrollan sus principales contradicciones. El análisis de clase de la sociedad española será, pues, el resultado de esta serie de artículos sobre la lucha de clases en España.

Para facilitar la comprensión de estos artículos esbozaremos, de todas formas, las conclusiones a las que provisionalmente hemos llegado sobre las principales contradicciones sociales en nuestro país. A estas conclusiones henos llegado por dos caminos distintos: la práctica de cada grupo social en el campo de la lucha de clases (por ejemplo, luchas obreras, control del aparato estatal, ideología nacionalista activa en sectores de la burguesía pequeña y media, etc.), y la posición de cada grupo social en la estructura socio-económica (estructura ocupacional, distribución de la renta, nivel de consumo y cultura, etc.).

La contradicción principal viene determinada por el modo de producción dominante, en este caso el capitalista, y por lo tanto define el carácter de la revolución española. Esta contradicción es la que enfrenta el bloque dominante, interesado en mantener el modo de producción capitalista y dirigido por la oligarquía financiera e industrial con el bloque obrero y popular, cuya resistencia a la explotación y opresión capitalista le conduce a una práctica y toma de conciencia de la necesidad de la transformación revolucionaria de la sociedad, revolución democrático-popular primero y socialista luego, proceso dirigido por el proletariado, El bloque dominante está compuesto por la oligarquía financiera e industrial y terrateniente, por la burguesía alta y media (esta última con sectores inestables por sus contradicciones con la oligarquía), el campesinado rico, las capas superiores del ejército, del clero, de los técnicos y administrativos del sector público y provado, altos funcionarios y burocracia falangista y capas superiores de las profesiones liberales. Del bloque obrero y popular forman parte el proletariado industrial y

y agrícola (excepto las capas superiores citadas), los estudiantes, los maestros, los intelectuales y los técnicos y la pequeña burguesía urbana y rural (aunque esta última es una clase mucho más inestable que, si faltara una hábil política por parte del proletariado respecto a ella, no asumiendo sus reivindicaciones, podrían también formar parte de un bloque reaccionario en muchos casos).

La contradicción en primer plano, es decir la que en el presente inmediato es más aguda y más movilizadora, la contradicción que determina la práctica actual de las clases, es la que enfrenta, a nivel político, a la oligarquía y su Estado fascista con el proletariado y otros sectores de las clases populares (asalariados, estudiantes). La base de esta contradicción reside en la capacidad reivindicativa (a partir de cuestiones económicas y políticas) del proletariado y otros sectores de las clases populares que les llevan a un enfrentamiento inmediato y antagónico con el Estado fascista de la oligarquía. Con independencia de la conciencia de sus participantes (conciencia que puede ser desde muy corporatista hasta revolucionaria y comunista), el carácter de la lucha del movimiento obrero y popular es hoy democrático puesto que en estos momentos su práctica de resistencia a la explotación y opresión de la oligarquía le lleva inmediatamente a un enfrentamiento político con el Estado de ésta en tanto que Estado fascista. Lo que no significa que el objetivo de los comunistas sea la democracia política, sino que la lucha por las libertades políticas es un instrumento para desarrollar las organizaciones de clase y de toma de conciencia revolucionaria.

Las contradicciones secundarias existen tanto en el interior del bloque dominante como en el bloque obrero y popular. Es importante conocerlas para utilizar las primeras y superar las segundas. En el primer caso, los distintos sistemas a través de los cuales las clases capitalistas realizan la explotación (la acumulación del capital), crea contradicciones a todos los niveles (económico, político e ideológico), y se manifiestan a través de las posiciones del capitalismo monopolista nacional frante al capitalismo financiero proimperialista de los sectores económicos dinámicos y atrasados, de los partidarios de la liberalización política y los del Estado autoritario, de libertades sindicales o de represión inmediata de las reivindicaciones laborales (que no coinciden necesariamente con las anteriores sino más bien con el dinamismo económico de cada sector, etc.) En el segundo caso, encontramos desfases importantes entre la lucha obrera y la estudiantil (la primera, a partir de reivindicaciones económicas, la segunda de motivaciones ideológicas), el peso de una ideología ambigua como el nacionalismo en los casos en los que la pequeña burguesía, intelectuales, ciertos sectores asalariados. son políticamente más activos, etc. Pero la fuerza y el carácter indiscriminatorio de la represión del Estado fascista es factor importante de unificación del movimiento obrero y popular.

Las grandes etapas de la España franquista

Pretendemos analizar la composición del bloque dominante desde 1939 hasta nuestros días, y sus relaciones con el Estado franquista. Para ello partimos de una división en tres grandes períodos que, en líneas generales, pueden definirse así:

1. Período de la primera acumulación, que va desde el final de la guerra civil hasta los pactos con los Estados Unidos, en 1953.
2. Período de apertura al capital extranjero y de estabilización (1953-1962).
3. Período de desarrollo y de nueva acumulación, con vistas a la inte-

gración en los mecanismos del capitalismo internacional (de 1962 a la actualidad).

En la medida en que esta periodización sea válida, podemos avanzar ya algún elemento de análisis imporante. Por ejemplo, puede decirse que si bien la composición del bloque dominante ha variado a lo largo de estos años, en el sentido de un predominio final de los sectores financiero e industrial, el Estado franquista en cambio, no ha variado en la misma proporción. O por decirlo de otra manera: las transformaciones ocurridas en el bloque dominante (sobre todo en los últimos años) no han encontrado su reflejo en las transformaciones correspondientes del poder del Estado. Este último sigue siendo, en gran parte, el mismo que dirigió la fase primera de acumulación industrial y agraria inmediatamente después de la guerra civil.

El bloque dominante y el Estado en el período 1939-1953

La guerra civil no fue, como algunos pretenden, un simple intento de vuelta atrás, de congelación del proceso de desarrollo político y económico iniciado por la República. Fue esto y algo más. De hecho, lo que se decidió en la guerra civil fue si la superación de la secular crisis de la sociedad española, agravada por los efectos de la crisis mundial de 1929, se haría por la vía del socialismo o por la vía del capitalismo monopolista. El triunfo militar del franquismo frustró la posibilidad de un desarrollo socialista y sentó las bases para el desarrollo capitalista monopolista.

Este capitalismo monopolista necesitaba un Estado fuerte que, no sólo le permitiera asegurar la acumulación rápida a expensas de las masas trabajadoras sino también superar las tendencias inmovilistas de sectores más retrógrados del propio bando triunfante (como la oligarquía terrateniente, por ejemplo).

El mecanimso que se utilizó, en el plano económico, fue el control estatal de los salarios, la inflación galopante, la interrvención directa del Estado en los mecanismos de acumulación capitalista y de creación de infraestructuras industriales (baste recordar la leyes de protección, defensa y ordenación de la industria nacional de 1939 y la ley de creación del I.N.I. en 1941).

En el plano político, el mecanismo consistió en la liquidación radical de los instrumentos tradicionales de acción política de todos los sectores vencidos (y de algunos de los vencedores, incluso), como son los partidos políticos y los sindicatos, y la concentración de todos los poderes en el Ejército y, concretamente, en su jefe supremo, el general Franco. Baste recordar que en septiembre de 1936 fueron prohibidos los partidos políticos, que el 19 de abril de 1937, la Falange y los Carlistas fueron unificados por la fuerza en un solo partido (F.E.T. y J.O.N.S.), al que se reservó la tarea de controlar a la clase obrera mediante el "sindicalismo" corporativo (o vertical), y que el general Franco fue convertido, a la vez, en Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Jefe del partido único (el Movimiento) y Jefe de las Fuerzas Armadas. Todos los poderes fueron acumulados en esta Jefatura suprema, incluso el legislativo mediante las leyes de 30-I-1938 y 8-VIII-1938 (todavía vigentes).

De este modo el Ejército se convirtió en el "partido político" fundamental del nuevo régimen, en la columna vertebral del sistema político.

Así, mientras en el bloque dominante todavía tenían un gran peso las clases tradicionales agrarias (favorecidas por la anulación de la reforma agraria republicana y por la subida de los precios agrícolas, correlativa a la penuria de aquellos años), el Estado militarizado iniciaba una política de desarrollo industrial (bautizada con el nombre de "autarquía") que iba a modificar

profundamente la correlación de fuerzas dentro del propio bloque dominante.

En la primera postguerra los rasgos del Estado eran, pues, los siguientes:

a) Concentración de poderes en el Ejército, a través de su jefatura suprema;

b) Al mismo tiempo, aparición de una nueva burocracia que resultaba tanto del "botín de guerra" como de las exigencias del incipiente desarrollo del capitalismo monopolista de Estado;

c) Desarrollo de una burocracia político-sindical, especialmente encargada de someter a la clase obrera a los mecanismos de acumulación capitalista y de organizar a la mano de obra con este objetivo;

d) Represión sistemátia y despiadada de todo intento de reconstrucción de los cuadros obreros derrotados en la guerra civil, mediante el doble juego de la violencia (ejecuciones masivas, procesos, encarcelamientos, supresión militar de los focos guerrilleros, etc.), y de la organización corporativa de los sindicatos;

e) Creación de nuevos instrumentos de acción política porque los tradicionales (los partidos políticos burgueses de la monarquía y de la II República) habían fracasado en la tarea de asegurar el orden burgués y de impulsar el capitalismo monopolista. Los "partidos políticos" de esta primera fase fueron, pues, esencialmente: el Ejército, en primer lugar; la burocracia falangista (Movimiento); la Iglesia; algunos grupos políticos o restos de grupos que intentaban enlazar con los partidos anteriores (como ciertos sectores monárquicos y el grupo de "Editorial Católica", dirigido por Martín Artajo, que podríamos calificar de incipiente Democracia Cristiana de derecha).

En 1945, la derrota mundial del nazismo y del fascismo, puso en serio peligro la estabilidad del Estado franquista. Parecía que éste sería incapaz de resistir la impetuosa corriente antifacista mundial. Para precaverse, el franquismo adoptó una serie de cambios de fachada (como el Fuero de los Españoles de 1945 y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947), que no modificaron en lo fundamental la estructura del Estado franquista. En efecto, estas modificaciones institucionales obedecieron a la necesidad de hacer frente a la política de bloqueo diplomático, permitiendo a los sectores monárquicos y, sobre todo, a la Democracia Cristiana, una mejor inserción en los mecanismos del poder político. Recuérdese que en aquellos momentos la Democracia Cristiana aparecía ya en todos los paises de Europa occidental como el instrumento interclasista más adecuado para bloquear la influencia comunista y restaurar plenamente el Estado capitalista con ayuda de los E.E.U.U. En España el bloqueo del comunismo era asegurado con creces por el Estado franquista; por ello el reconocimiento de un mayor papel político a la Democracia Cristiana de derecha (ejemplificado por el nombramiento de Martín Artajo como ministro de asuntos exteriores), si bien tendía, en parte, a ampliar la base de sustentación del sistema en España era, sobre todo, una baza importante en la política de ruptura del cerco diplomático, de cara a las potencias capitalistas occidentales.

Inversiones extrajeras, crisis política y estabilización en el período 1953-1962

Los pactos con los Estados Unidos en 1953, abrieron una nueva fase en el desarrollo político y económico del régimen. Puede decirse que a partir de entonces el proceso de acumulación acelerada se refinó o, más exactamente, intentó adoptar mecanismos más perfeccionados.

Sin abandonar los rudos mecanismos de la postguerra inmediata (control

autoritario de los salarios, inflación, ordenación estatal del desarrollo industrial, proteccionismo, etc.), el capitalismo español contó con nuevas fuentes de inversión que desplazaron progresivamente la correlación de fuerzas en el seno del bloque dominante, favoreciendo la hegemonía de la burguesía financiera e industrial y propiciando la fusión con ellas de una parte de la vieja oligarquía terrateniente. Entre estos nuevos mecanismos cabe señalar, en primer lugar, la llegada de capital extranjero y la adopción de nuevas y más refinadas técnicas para el aumento de la tasa de plusvalía.

La aceleración de la industrialización significó la condena del campo a sector subordinado en el desarrollo económico y provocó grandes transformaciones sociales (éxodo rural creciente, aumento cuantitativo de la clase obrera urbana, crecimiento del sector terciario), todo ello en condiciones caóticas, sin cauces institucionales (políticos y económicos) para ordenarlo.

La crisis se hizo visible, por ejemplo, en la Universidad. Esta seguía estructurada en función de las exigencias del primer período de acumulación, cuando se necesitaban pocos cuadros técnicos y la función universitaria era esencialmente ideológico-política. El crecimiento económico hizo sentir, por primera vez, esta necesidad de cuadros pero la institución universitaria era muy rígida y no permitía readaptaciones súbitas. El ministerio Ruiz-Jiménez fue un primer intento de satisfacer las nuevas necesidades dentro del viejo marco institucional, para lo cual se vió obligado a abrir un cierto cauce a otros valores culturales (liberalización). Como es sabido, esta apertura provocó la resistencia encarnizada de los sectores falangistas más aferrados a la función ideológico-política de la Universidad y, de rechazo, radicalizó las opciones políticas de los sectores protagonistas de la apertura liberal. La crisis estalló abiertamente en 1956-57, provocó la caida de Ruiz-Jiménez y el cierre temporal de la línea iniciada por éste, sin que por ello el régimen consiguiese liquidar completamente los fermentos explosivos acumulados en la Universidad.

En aquella situación de incertidumbre institucional una cosa se hizo patente: que las estructuras político-estatales del primer período de acumulación se adaptaban mal a las nuevas necesidades de estas clases dominantes, cumplían mal su papel de cohesionadoras de la formación social y aseguraban mal la reproducción de las condiciones de producción del sistema.

Pronto surgió, pues, "una tercera fuerza", es decir, un nuevo partido político que se identificaba con las exigencias del crecimiento económico capitalista al tiempo que daba serias garantías de continuidad en relación con la ideología dominante: hablamos, claro está, del Opus Dei. La primera manifestación pública de las aspiraciones políticas del nuevo partido fue seguramente la serie de artículos doctrinales de Calvo Serer en 1953 sobre la "tercera fuerza".

La crisis de la burocracia falangista en los acontecimientos universitarios de 1956-57, provocó la aceleración del proceso, y en el mismo año 1957 el Opus Dei entró en el Gobierno. A partir del cambio ministerial de 1957 se entró en una nueva fase política que podría verse, grosso modo, como un primer intento de adaptar la estructura del sistema político ---el Estado-- a la nueva correlación de fuerzas en el seno del bloque dominante. Concretamente, a partir de 1957 las columnas del sistema político (los "partidos" políticos dominantes) fueron el Opus Dei y el Ejército.

El Ejército era la garantía de que la función represiva del Estado seguiría cumpliéndose con rigor (con mayor rigor si cabe, dado que se preveía la intensificación de la lucha obrera con la puesta en marcha de la nueva política económica: las huelgas de 1956, 1957 y 1958 eran un claro indicio de ello, y mostraban la combatividad de amplios sectores obreros, principalmente

en Barcelona. El nombramiento del general Alonso Vega como ministro de la Gobernación y la creación en 1958 de la "Jurisdicción especial para actividades extremistas", el siniestro tribunal del coronel Eymar, eran síntomas inequívocos de ello. Por otro lado, la ideología tecnocrática y tradicionalista a la vez del Opus Dei era una garantía para el bloque dominante de que la adaptación de las estructuras políticas y económicas se haría sin grandes soluciones de continuidad. Con el cese del entonces falangista Girón, los "sindicatos" corporativos perdían algo de su rigidez anterior y se iniciaba tímidamente una flexibilización tecnocrática. Hasta 1958, por ejemplo, los salarios estuvieron sometidos al control rígido del Estado mediante las reglamentaciones de trabajo, dictadas por el Gobierno o por el Ministerio de Trabajo. A partir de 1958 se inició una relativa política de rentas con la introducción de los convenios colectivos, concebidos para dar una mayor flexibilidad a la patronal para la extracción de la plusvalía. Este mecanismo funcionó poco al principio (pues en 1958 sólo se firmaron siete convenios colectivos), pero experimentó un imdudable desarrollo.

Era evidente, sin embargo, que el paso a la nueva etapa de crecimiento y acumulación, se hacía con una forma de poder estatal imperfectamente adaptada a las nuevas necesidades de la burguesía, puesto que conservaba los mismos mecanismos institucionales y los mismos canales políticos que en el período de la primera acumulación. la racionalización de los mecanismos no pasó del nivel administrativo (baste recordar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, por ejemplo) y del económico. El nivel estatal, en cambio, seguía aferrado a los mismos patrones y el relevo de equipos (de partidos) se hacía a través de los mismos canales que antes.

Prueba de esta ambigüedad es que antes de entrar de lleno en la etapa de la estabilización y programación, se codificó sólamente la base ideológica del sistema, declarándola inmutable y haciéndola obligatoria para toda la burocracia estatal (nos referimos, calro está, a la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958).

En definitiva, el bloque dominante quería una adaptación de los mecanismos políticos a las nuevas nécesidades, pero sin disminuir el potencial represivo del Estado, pues en la nueva etapa acumuladora podían estallar (como así ocurrió) luchas obreras muy serias. Por ello se contentó con un Estado que si bien era pesado en su fúncionamiento y anacrónico en muchas de sus estructuras le aseguraba, a la vez, el orden público y un cierto ritmo de desarrollo económico, confiando en que este mismo desarrollo le permitiría, más adelante, desplazar el acento hacia los mecanismos de integración y de organización del consentimiento y reducir el peso del aparato represivo, poco adecuado para el funcionamiento de una economía de consumo.

El bloque dominante y el Estado en el período de acumulación programada (1962-1970)

El comienzo de la nueva fase puso de relieve las posibilidades y los límites de la operación. Por un lado, la estabilización alcanzó todos sus objetivos y sentó las bases para el incremento del desarrollo capitalista y la programación ulteriores. Por otro lado, la resistencia de la clase obrera resultó superior a lo esperado. Las huegas de 1962 y la aparición en su transcurso de nuevas formas de organización de la clase obrera que superaban el valladar de los sindicatos corporativos (las Comisiones Obreras), constituyeron un serio aviso para las clases del bloque dominante.

Además, la aceleración de la acumulación capitalista y la definitiva

pérdida de velocidad del sector agrario, modificaron irrevocablemente la correlación de fuerzas en el bloque dominante, asegurando la hegemonía de la burguesía financiera y monopolista. Al tiempo que la burguesía financiera se convertía en el grupo hegemónico, un sector del capital se subordinaba al capital extranjero, que invadía los sectores más dinámicos de la economía española.

Por un lado, pues, gran resistencia organizada de la clase obrera, que se complementaba políticamente con el desarrollo de la lucha universitaria (estallido del SEU, creación del Sindicato Democrático). Por otro lado, necesidad de agilizar las estructuras del poder estatal para asegurar mejor la plasmación política de la nueva correlación de fuerzas en el seno del bloque dominante. Todo esto, en condiciones de integración cada vez mayor en los mecanismos del imperialismo americano, en una fase de consolidación y expansión agresiva de éste (era el momento de la administración Kennedy, es decir, de una política de coexistencia pacífica que favorecía los intereses del imperialismo americano, en la medida en que el empate nuclear permitía el libre juego de la expansión económica americana).

En el terreno político, el régimen franquista entró en la fase de desarrollo y programación sin ideas claras, prisionero de los viejos esquemas. Ante la resistencia de la clase obrera, por ejemplo, pasó por un primer momento de perplejidad que le llevó, incluso, a tolerar la existencia de las Comisiones Obreras (perplejidad que fue interpretada por un sector de éstas como signo inequívoco de debilidad del régimen y que llevó a la errónea política de asambleas abiertas y de acciones de tipo parlamentario). Pero pronto volvió a la línea represiva y concentró sus golpes, precisamente, contra el movimiento de Comisiones Obreras, aprovechando los grandes flancos que dejaba abiertos la confianza de muchos de sus dirigentes.

En cambio, para resolver las necesidades planteadas a la burguesía por la modificación del bloque dominante, adoptó la política llamada de "liberalización" cuyo mejor símbolo es la Ley de Prensa que se proponía un doble objetivo:

a) Hacer más ágil la comunicación entre el bloque dominante y el Estado, para que éste pudiese responder mejor a la estructura de aquél.

b) Organizar el consentimiento de las nuevas capas medias que se fortalecían numéricamente a medida que se desarrollaban los sectores industrial y comercial. Para consolidarse, estos sectores necesitaban una cierta influencia política. La política de liberalización les daba una apariencia de esta influencia, al mismo tiempo que satisfacía su apetito de orden público, reprimiendo a la clase obrera.

Pero la política de liberalización era insuficiente y excesiva al mismo tiempo. Era insuficiente porque no desplazaba del poder con la necesaria rapidez a sectores como la burocracia falangista, representativos de la primera fase de acumulación. El aparato del Estado no adquiría, pues, la agilidad deseada por la burguesía financiera e industrial. Y en la medida en que los mecanismos del Estado se anquilosaban, el peso fundamental recaía pura y exclusivamente en el aparato represivo que tiene sus propias exigencias y que no se caracteriza, precisamente, por su agilidad. Un ejemplo claro de todo esto es que mientras algunos sectores de la oligarquía financiera e industrial pedían el reconocimiento de una cierta representación sindical obrera en la empresa y con ello el desmantelamiento de los sindicatos verticales para fomentar la división sindical y contar con "interlocutores" sindicales válidos para ella, el régimen ponía en vigor la Ley de Bandidaje y Terrorismo y asesinaba a Julián Grimau (1963).

Pero al mismo tiempo la liberalización era peligrosa para el régimen

porque en la medida que intentaba crear nuevos canales de comunicación con el bloque dominante y crear un frente más amplio de clases aliadas entre las capas medias, ponía en peligro el precario equilibrio del sistema.

La radicalización de la lucha obrera y del movimiento universitario y la aparición de síntomas de crisis económica, obligaron al bloque dominante y al Estado a adoptar una solución de compromiso.

Una solución de compromiso: la Ley Orgánica

Decimos que la Ley Orgánica de 1966 fue una solución de compromiso porque, por un lado, reafirmó la primacía del Ejército como partido político, en la persona de su jefe supremo, el dictador Franco. Por otro lado, arbitró un mecanismo de sustitución de esta jefatura, para el futuro, Y no sólo se aplazaba la sustitución sino que se preveía como una operación que, sin comprometer el papel primordial del Ejército, permitiese la inserción en el sistema de otros "partidos políticos" concebidos como fracciones muy controladas (recordemos que la fórula utilizada fue "contraste de pareceres") de un solo partido orgánico del bloque dominante.

En esto radica la debilidad del mecanismo porque el bloque dominante tiende, precisamente, a superar la fase de un solo "partido orgánico"(el Movimiento) y a crear varios partidos que representen mejor la correlación real de fuerzas existente en el bloque dominante. La permanencia del Movimiento como partido orgánico falsea la situación , pes da un peso político desproporcionado a un sector parasitario (la burocracia falangista) que la burguesía financiera y monopolista quiere, precisamente, marginar.

Ahora bien, el hecho de que los grupos hegemónicos del bloque dominante no hayan conseguido desplazar a la burocracia falangista ni crear partidos políticos propios y hayan tenido que aceptar, en definitiva, el compromiso de la Ley Orgánica, es el mejor índice de su fuerza real. Demuestra que estos grupos hegemónicos son todavía estructuralmente débiles y tienen una conciencia, más o menos clara, de su debilidad. Debilidad, decimos. Esto significa inseguridad y temor frente a la clase obrera, a la que necesitan explotar más intensamente (para asegurar un nivel de acumulación y de concentración suficientes de cara a la integración europea), y controlar con mecanismos que quiten carga política a la explotación. En efecto, los componentes del bloque dominante comprenden que la permanencia del régimen como estructura esencialmente represiva convierte la inevitable lucha económica en inmediata lucha política. Es un verdadero círculo vicioso. En la medida en que la lucha económica se convierte en política, cobra mayor peso el régimen como aparato represivo. En la medida en que la represión priva sobre la organización del consentimiento, resulta más difícil recurrir a formas más ágiles y menos directamente político-represivas de explotación de la clase obrera; y más difícil resulta, también, agilizar los instrumentos políticos propios de los grupos hegemónicos del bloque dominante. La autonomía del Estado resulta, entonces, excesiva para el bloque dominante, que se siente más "representado" por la actual forma de poder estatal pero es, al mismo tiempo, incapaz de modificarla. Y, mientras tanto, se contenta con que el aparato represivo del Estado le asegure el orden público (es decir, las condiciones externas de la explotación de la clase obrera), y con que le permita unos niveles quizá precarios pero tangibles de acumulación.

La situación actual

Este es, en líneas generales, el telón de fondo de la actual situación política. Pero sobre este telón de fondo se proyectan una serie de datos co-

yunturales que debemos analizar uno por uno.

1. El peligro de una solución "a la griega"

El compromiso de la Ley Orgánica de 1966, no le resolvió a la burguesía el problema de sus partidos políticos. En esencia, estos "partidos" o canales siguen siendo los mismos de la primera etapa del régimen, la de los años cuarenta. Unicamente ha habido un cierto desplazamiento de algunos de ellos por otros (de Falange por el Opus Dei), dentro de unas mismas estructuras. En el moento de su acceso al poder, el Opus Dei pudo aparecer ante las clases más dinámicas del bloque dominante como su partido político, en las condiciones del momento. Pero el Opus ha aprovechado la falta de partidos para intentar crear, desde el Estado, una verdadera fracción autónoma de la burguesía financiera e industrial, con intereses específicos, que aspira a la hegemonía dentro del bloque en el poder. Las demás clases y fracciones de clases del bloque se dan cuenta, pues, de que el Opus Dei más que representarlas a todas tiende a representarse a si mismo. En consecuencia, intensifican su búsqueda de instrumentos políticos (partidos) propios, pero es una situación coyuntural particularmente delicada que les impide forzar las cosas y actuar con audacia (necesidad de intensificar la explotación de la clase obrera y de contar, para ello, con un aparato represivo eficaz). En la medida en que estos sectores no encuentran sus propios mecanismos políticos y en que, por consiguiente, es Estado es monopolizado por grupos particulares, las clases hegemónicas del bloque dominante pueden caer en la tentación de dejar en manos del Ejército la solución temporal de la crisis, sobre todo si ven la posibilidad de que el Ejército sea controlado por jefes "desarrolistas", dispuestos a poner orden en la esfera del Estado, a asegurar el orden sin concesiones y a asegurar las condiciones de una acumulación capitañista acelerada.

2. La creación de partidos políticos, dentro y fuera del Movimiento

Pero la tentación "fascistizante" presenta graves dificultades. El Ejército ha sido ya el partido político fundamental a lo largo de estos años y nada garantiza que si se convierte en el partido único sea capaz de asegurar todas las condiciones del desarrollo capitalista. Entre éstas, dos tienen una importancia capital:

a) Mejorar el nivel técnico del aparato estatal, aumentar su racionalización y mejorar los canales de reclutamiento del personal calificado (en esta línea se orienta, por ejemplo, el proyecto de Ley de Educación);

b) Asegurar mejor el consentimiento de los gobernados, especialmente de las nuevas capas medias, para lo cual es preciso poner el acento no tanto en la represión (lo único que puede hacer el ejército), como en la organización del consentimiento y la difusión de un principio de legitimidad más general.

Para todo esto, el bloque dominante necesita contar con mecanismos políticos (partidos políticos) más ágiles y más representativos de la verdadera correlación de fuerzas en el seno del bloque.

Estos partidos están ahora en status nascendi, tanto dentro del propio sistema estatal (asociaciones dentro del Movimiento) como fuera de él (DC, grupo Areilza, "Cuadernos para el Diálogo", grupo Gil Robles, socialdemocracia de Tierno Galván, etc.).

El obstáculo fundamental para que estos gérmenes de partido cristalicen en partidos propiamente dichos, es decir, verdaderamente representativos de las clases del bloque dominante, es la rigidez misma del sistema estatal, que permite que ejerzan el poder político grupos que no representan ya, o sólo representan en parte, a las clases del bloque (Falange, Opus Dei).

Ahora bien, ¿cómo eliminar esta rigidez sin provocar el hundimiento del sistema y sin abrir paso a fuerzas antagónicas (movimiento obrero, esen-

cialmente)?. La solución militar fascista puede impedir este hundimiento, pero es muy improbable que permita superar la rigidez del sistema. En el mejor de los casos sustituirá una rigidez por otra.

La posible salida consiste en asegurarse, por adelantado, la "benevolencia" de los grupos políticos que encuadran, de momento, el movimiento obrero. Y entre ellos, en primer lugar, el PC. De aquí que algunos de los grupos mencionados más arriba tiendan al compromiso con el PC, prometiéndole unas libertades formales (es decir, la legalización) a cambio de su renuncia a corto plazo a los objetivos revolucionarios (a largo plazo ya se verá. En todo caso, los grupos demócrata-burgueses confían en que el compromiso les será lo bastante favorable como para impedir las soluciones revolucionarias a largo plazo).

Este compromiso con las fuerzas del movimiento obrero es, de hecho, la gran baza que los citados grupos pueden hacer valer para lo cual, evidentemente, les interesa la liquidación de los grupos obreros que menos se prestan al compromiso y que puedan invalidarlo por su vinculación efectiva.

Otra baza importante es el apoyo del capitalismo internacional, al que se considera bastante sólido como para impedir el hundimiento del sistema político y económico español. En la medida que la coexistencia pacífica consolida el imperialismo, esta baza puede ser decisiva.

La opción de los grupos demócrata-burgueses es, pues, un programa de libertades formales, de racionalización administrativa, de concentración capitalista, de integración de las capas medias, de neutralización del movimiento obrero y de fusión con el capitalismo internacional. No hay más que ver el contenido de la carta dirigida recientemente al secretario de Estado nortemericano, Rogers, por un grupo de miembros de la oposición demócrata-burguesa: su posición es totalmente atlantista.

La debilidad fundamental de esta opción es lo que podríamos llamar su "programa de transición". En general, todos estos sectores se niegan a apoyarse en un movimiento de masas y confían en una alianza con sectores insertos ya en el aparato estatal (la fracción "liberal" del Ejército, la de Díaz Alegría, Galera Paniagua, etc.; la fracción liberal e "ilustrada" del Opus Dei, la derecha democristiana de "Editorial Católica", cuyo representante más visible es Silva Muñoz, etc.), e incluso en una posible inflexión "liberal" del propio Franco o, por lo menos, de su sucesor Juan Carlos. En este sentido puede decir un político como Areilza que él es "un hombre de pasado mañana".

3. El Opus, la Falange y las Asociaciones del Movimiento

Por su parte los grupos que monopolizan el aparato estatal se encuentran en una situación precaria. El proceso de desmantelamiento de los bastiones de la burocracia falangista ha sido lento y contradictorio, como puede verse por las soluciones dadas al problema organizativo del Movimiento, después de la Ley Orgánica. La C.N.S., pieza clave de la situación actual, sigue en amnos de la burocracia falangista. Todo esto da a dicha burocracia un peso político que no corresponde a su presencia real en las estructuras económicas y sociales del país. En una palabra, los grupos hegemónicos del bloque dominante no reconocen como suyo al partido político de la Falange, pero no poseen instrumentos para desalojarlo definitivamente del poder político.

Por su parte, el Opus Dei ha entrado en una fase de crisis profunda, que el escándalo MATESA ha agravado. Aunque el cambio ministerial de octubre de 1969 pareció consolidar su posición como partido dominante, pronto se ha puesto de relieve que tampoco es considerado como partido representativo de las clases hegemónicas del bloque dominante (o por lo menos, no es visto como partido plenamente representativo por todas ellas). El escándalo MATESA y la propia actuación del Opus Dei como grupo "burgués" parcial y específico, más que como partido político de las clases hegemónicas en su conjunto, le han invali-

dado como partido dominante y es muy posible (y probable) que sea desplazado pronto de su situación.

Desde el Estado, pues, caben dos opciones (en la medida en que el Opus Dei deja de ser viable como partido dominante):

a) Intentar una nueva combinación de los grupos que han estado ejerciendo el poder estatal a lo largo de estos años. Por ejemplo, una nueva combinación de Opus Dei, Falange, Democracias Cristiana de derecha, monárquicos y militares, en la que el Opus pierda su hegemonía exclusiva).

b) Abrirse a algunos grupos que han estado marginados del poder estatal y, en primer lugar, a los que sin haber ejercido hasta ahora el poder se mueven en la órbita del sistema.(De aquí el intento de los Ballarín, los Cantero del Castillo y los Tarragona, por ejemplo, de poner en pie las llamadas "Asociaciones dentro del Movimiento").

Ahora bien, ambas soluciones (y la primera en especial) se caracterizan por un alto grado de rigidez, es decir de inmovilismo. Más que resolver los problemas de fondo, equivalen a parches de circunstancias que no desbloqueann el campo, antes al contrario).

4. El movimiento obrero

El telón de fondo de toda esta problemática es, evidentemente, la incógnita que representa el movimiento obrero para el bloque dominante. Es esta incógnita la que explica la prudencia de las clases hegemónicas del bloque a la hora de imponer sus opciones políticas. Intentan despejarla, como hemos visto, de dos maneras:

a) Mediante la conservación del aparato represivo del Estado;

b) Mediante el compromiso por arriba con los grupos políticos que ellos creen que representan al movimiento obrero. La debilidad de esta segunda vía es que, por más garantías que de el PC, ellos no están seguros de que controle efectivamente el movimiento obrero, ni de que pueda frenar totalmente el movimiento de masas (porque siempre cabe la posibilidad, como demostró el mayo francés, de un desbordamiento masivo del PC y porque éste no puede renunciar totalmente, so pena de descalificación, a fomentar el movimiento de masas).

En la medida que esta segunda vía resulta problemática, el bloque dominante escoge la primera. Y con ello fomenta la rigidez del propio sistema político, esencialmente represivo. Es, como decíamos más arriba, un verdadero círculo vicioso.

El bloque dominante intenta sacar el máximo provecho de una situación que sabe inestable, a través del aumento autoritario de la tasa de la plusvalía y de la acumulación. Más arriba hemos hecho mención del mecanismo de los convenios colectivos. Tras unos comienzos tímidos (recordemos que en 1958 sólo se firmaron siete) se ha conseguido un cierto desarrollo del sistema. En 1962, por ejemplo, se firmaron 1.538, que afectaron a un total de 2.316.413 trabajadores. Pero incluso este margen de maniobra es débil. Desde el punto de vista económico, la negociación de los convenios colectivos puede rebajar la tasa de acumulación, y por ello se ha complementado con el establecimiento autoritario de diversos topes de aumento negociable (8% en 1966, 5'9% en 1969 y 6'5% u 8% para 1970-71).

Gracias a ello el bloque dominante ha obtenido, es cierto, un aumento de la productividad muy superior a los incrementos salariales (en los años 1964, 1965 y 1966, que fueron los de expansión, la productividad aumentó en un 6'9% mientras los salarios lo hacían en un 4'6%, según las cifras oficiales, que no hay que aceptar, pero que permiten hacer comparaciones). Pero se trata de un procedimiento peligroso para la burguesía, pues en la medida en que se apoya casi exclusivamente en resortes coactivos y autoritarios convierte, con frecuencia, la negociación de convenios (puramente económica en principio) en

enfrentamiento político.

Por esto un sector del bloque dominante preconiza otros mecanismos, como el sindicato "desfalangizado", un cierto reconocimiento del derecho de huelga, el despido libre, la negociación directa entre la patronal y unos representantes obreros válidos, etc. Todo esto, naturalmente, para segurar los mismos objetivos que ahora (aumento de la tasa de plusvalía, aumento de la tasa de acumulación, concentración capitalista) pero con métodos menos directamente político-coactivos.

El movimiento obrero frente al Estado franquista

Naturalmente, al movimiento no le es indiferente la solución política que resulte finalmente. Una involución militar fascista dificultaría todavía más sus posibilidades de organización y de forja de cuadros políticos.

Pero esto no quiere decir que tenga que ponerse políticamente a remolque de los sectores del bloque dominante que preconizan una solución "aperturista". Al movimiento obrero no le interesa la democracia liberal-burguesa en si misma, sino su propia democracia, como fase sobrestructural de la solución socialista. Para ello el movimiento obrero debe luchar por sus propios objetivos socialistas. En la medida en que éstos comportan como fase previa la conquista de una democracia política, podrá el movimientos obrero llegar a ciertas alianzas tácticas con sectores ajenos al bloque popular. Pero estas alianzas sólo serán fructíferas para el movimiento obrero en la medida que se hagan desde posiciones de fuerza. El simple compromiso por arriba, en ausencia de un verdadero movimiento de masas por objetivos socialistas, debilita al movimiento obrero porque lo pone a remolque de intereses ajenos (burgueses). Y es aleatorio pensar que este comprimiso por arriba será compensado por la posibilidad futura de movilizar a las masas, pues en la base misma del compromiso está la voluntad de los grupos burgueses de frustrar esta movilización (para eso quieren llegar al poder, precisamente).

Lo importante, lo decisivo para el movimiento obrero es su cohesión política, indispensable para asegurar su hegemonía en el seno del movimiento popular y triunfar en la lucha por el poder político, contra el Estado Burgués.

Pero todo esto hay que situarlo en el marco concreto de nuestro país, sin quemar las etapas ni sucumbir a las impaciencias subjetivas. Las luchas actuales del movimiento obrero español, su carácter reivindicativo y sindical hay que entenderlas en el marco que hemos intentado describir. Así se explican las huelgas mineras de 1962 y la mínima solidaridad que encontraron en Barcelona, en Madrid y en el País Vasco; la gran huelga de Laminados de Bandas en 1966; las luchas de 1967 en Madrid por parte de los metalúrgicos, sobre todo; la ola de paros y huelgas desencadenada en el último trimestre de 1969 y en el primero de 1970.

Esta agudización de la lucha de clases ha incidido en la relación entre el bloque dominante y el Estado franquista, acentuando sus tensiones, como hemos visto. Por esto la lucha económica se convierte en poilítica y adquiere el nivel político que corresponde a la fase actual, ni más ni menos. Es absurdo querer ver en ella más de lo que da de si.

La lucha política de la clase obrera está, hoy por hoy, en una fase en la que la lucha por las libertades democráticas es muy importante. Basta ver algunos ejemplos: lucha por el derecho de reunión en AEG; lucha por el derecho de huelga y por el derecho de asociación en múltiples casos, como en los intentos que hubo de conseguir el reconocimiento de Comisiones Obreras; respuesta contra la represión en Erandio (octubre y noviembre de 1969); huelga general en Eibar y paros parciales en Elgoibar, Rentería, etc. en protesta por los con-

sejos de guerra contra los militantes de ETA, etc.

Pero cuando decimos fase deomcrática no queremos decir fase "democrático-burguesa". Cierto que muchas de esas reivindicaciones políticas se pueden inscribir en un marco democrático-burgués, pero de eso se trata, de no dejar que se inscriban en él, de no caer en el mero compromiso táctico por arriba.

La tarea de los comunistas es, precisamente, poner de relieve la íntima ligazón existente entre estas reivindicaciones democráticas inmediatas y los objetivos socialistas del movimiento obrero, mostrar que a través de esas luchas el movimiento obrero puede conseguir una fuerza y una organización propias que le permitan imponerse como fuerza hegemónica y encabezar un gran movimiento obrero y popular.

Esta tarea no puede ser cumplida por un simple vanguardia desvinculada de las masas. Se trata de propiciar un movimiento de masas, de aplicar una línea de masas que posibilite el surgimiento de los cuadros y las estructuras organizativas de una movimiento obrero fuerte y unificado. Esto significa que la necesidad prioritaria actual es la creación de un sindicato de clase unitario, cuyo gérmen se encuentra en las Comisiones Obreras, entendidas no como movimiento político-social amplio, sino como organización sindical arraigada en las empresas.

Construir la unidad quiere decir proceder a una intensa clarificación política e ideológica (haciendo, por ejemplo, un análisis de cómo han funcionado las Comisiones Obreras hasta ahora). Pero quiere decir, sobre todo, fomentar las luchas en la fábrica y fuera de ella, para que la clase obrera llegue a forjarse una perspectiva política general de su propio papel como clase hegemónica en la lucha contra el Estado burgués.

Se trata, por consiguiente, de evitar los vicios corporativistas introducidos por los "sindicalistas" y los pseudo-revolucionarios izquierdistas, y también de evitar el error contrario, que consiste en diluir el trabajo de organización en la fábrica lanzando sistemáticamente a la calle con objetivos mal comprendidos por los trabajadores (como en el caso típico de la manifestación por Camboya o de las sucesivas Jornadas de Lucha Nacional).

El problema fundamental es conseguir que el movimiento obrero pase a un nivel de lucha conscientemente político -- es decir, de enfrentamiento con el Estado burgués -- partiendo de su nivel actual de conciencia y de organización, sin hacerse excesivas ilusiones a corto plazo pero sin cejar ni un solo momento en la aplicación consecuente de una verdadera línea de masas.